

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **LUZ HELENA CARDONA CANO**
Demandada : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**
 -COLPENSIONES-
Radicado : **05001 31 05 004 2020 00030 01**
Providencia : Sentencia
Temas y
Subtemas : Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes, afiliado-
Decisión : **Confirma** decisión condenatoria
Sentencia N° : **228**

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Declarar que a la señora Luz Helena Cardona Cano le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes derivada del

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el

fallecimiento de su cónyuge Justo Gustavo Umaña Casas y en consecuencia **se condene a Colpensiones a su reconocimiento; indexación** de las condenas **y costas procesales**.

Hechos relevantes de la demanda:

Afirmó la apoderada de la parte actora, que el señor Justo Gustavo Umaña Casas, **contrajo matrimonio católico con la demandante el 2 de enero del 1993**, compartieron techo, cama y mesa **hasta el día 7 de abril del 2019**, fecha de su fallecimiento que ocurrió en la ciudad de Popayán; que el causante enfermó y su cónyuge cuidó de él hasta el momento de su fallecimiento. Cuenta que la pareja no tuvo hijos, pero el causante al momento de contraer matrimonio, tenía dos hijos, ambos mayores de edad y económicamente autosuficientes.

Asegura que su mandante dependió económicamente de su cónyuge, pues siempre fue ama de casa; que siendo la cónyuge supérstite y única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes solicitó su reconocimiento a Colpensiones, entidad que la negó mediante la Resolución SUB 158013 del 19 de junio de 2019, argumentando que no acreditaba el requisito de cinco (5) años de convivencia con el causante; que frente a la decisión anterior se formularon los recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación, acreditando con cuatro (4) nuevas declaraciones extraproceso que daban cuenta de la convivencia con el causante desde su matrimonio, siendo resueltos negativamente a través de los actos administrativos SUB 182533 del 11 de julio y DPE 7905 del 14 de agosto del año 2019.

RESPUESTA A LA DEMANDA:

COLPENSIONES a través de apoderado judicial, contestó la demanda² aceptando la calidad de afiliado del causante Justo Gustavo Umaña Casas, su fallecimiento y la negativa de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante; respecto a los demás hechos indica que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones que denominó: improcedencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, imposibilidad de condena en Costas y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El **Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín**, **condenó a Colpensiones a reconocer a la señora Luz Helena Cardona Cano pensión de sobrevivientes a partir del 8 de abril de 2019**, derivada del fallecimiento de su cónyuge Justo Gustavo Umaña Casas; **a pagar la suma de \$93.623.005,00 por retroactivo pensional**, causado hasta el 30 de septiembre de 2022 y a partir del primero (1º) de octubre del referido año, la accionada continuará reconociendo la mesada pensional, en cuantía de \$2.219.142,00,00 mensuales, junto con la mesada adicional de diciembre y aplicando los incrementos anuales dispuestos por el Gobierno Nacional, con carácter vitalicio. Autorizó a la entidad demandada a realizar los descuentos por salud. **Condenó al pago de los intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 25 de junio de 2019 hasta la fecha de pago efectivo. **Declaró no prósperas las excepciones de mérito propuestas. Condenó en costas a cargo de la entidad**

² Folios 41 a 46 del archivo 01 del expediente digital.

demandada, fijando como agencias en derecho en la suma de \$7.000.000,00 a favor de la parte actora.

Para sustentar lo anterior, **argumentó el a quo que** hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante, toda vez que el causante dejó causado el derecho en favor de los beneficiarios, al haber cotizado más de 50 semanas en los tres (3) años anteriores al fallecimiento; que el requisito de convivencia se encuentra demostrado, **pues si bien el señor Justo Gustavo Umaña falleció en la ciudad de Popayán ello fue en razón a que laboraba allí, sin que ninguno de los testigos presentados ni en la investigación administrativa se aduzca que existió una ruptura del vínculo que existía entre la demandante y su esposo**; no constatándose en el registro civil de matrimonio anotaciones de divorcio, disolución o separación de la sociedad conyugal y además los declarantes dieron cuenta que la convivencia se dio hasta el fallecimiento del causante, habiendo estado la demandante al cuidado durante su enfermedad.

Conforme a lo anterior condenó al reconocimiento a la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante a partir de la fecha fallecimiento del causante al no configurarse el fenómeno jurídico de la prescripción; con derecho a 13 mesadas y al pago de intereses moratorios, al no existir una razón válida de la entidad para negar la prestación.

RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada de Colpensiones formuló recurso de Apelación, manifestando que **dentro del debate probatorio no se llega a un grado de verdad objetiva que demuestre cinco (5) años de convivencia**, por lo que la entidad le da plena

credibilidad a la investigación administrativa en la cual se concluyó que la señora Luz Helena Cardona Cano y el señor Justo Gustavo Umaña Casas, no convivieron ese lapso de tiempo previo al fallecimiento de éste último. Explicó que la investigación administrativa es el procedimiento interno mediante el cual se somete a verificación y corroboración los medios de prueba allegados por los solicitantes para acreditar su condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Indica que **no hay lugar a condenar al reconocimiento de intereses moratorios por cuanto se negó la prestación al no acreditar la demandante los requisitos**, sin existir por parte de la entidad capricho o arbitrariedad.

De acuerdo a lo anterior solicita **se revoque en su integridad la Sentencia de Primera Instancia** y se absuelva a su representada de todas las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Colpensiones a través de su apoderada, reitera los argumentos indicados tanto al contestar a la demanda como al sustentar su recurso de Apelación, solicitando se revoque en su integridad la Sentencia de Primera Instancia.

Y la apoderada de la demandante Luz Helena Cardona Cano, solicita se confirme la decisión de Primera Instancia, indicando que quedó debidamente acreditado con la prueba el requisito de convivencia de la demandante con su cónyuge fallecido.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide

la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación y se conocerá en Consulta en favor de Colpensiones en todo lo demás; lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15, 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, analizándose si la señora Luz Helena Cardona Cano, demostró el requisito de convivencia con el causante para tener derecho a la pensión de sobrevivientes; en caso afirmativo si hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios. Se conocerá en Consulta en favor de Colpensiones con respecto a la legalidad de las demás condenas impuestas en su contra.

Encontrando esta Colegiatura procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1° Pensión de sobrevivientes (Apelación):

Aduce la apoderada de Colpensiones en su recurso de Apelación, que dentro del debate probatorio no se llega a un grado

de verdad objetiva que demuestre cinco (5) años de convivencia, encontrando esta Sala de Decisión que:

El literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 –vigente para la fecha de fallecimiento del causante–, contempla quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre ellos, en forma vitalicia, la cónyuge o compañera permanente, cumpliendo ciertas condiciones; veamos:

“... ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. **Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:**

ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica **CONDICIONALMENTE** exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> **Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:**

a) **En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;**

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente...”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con la norma transcrita, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, **de causante**

afiliado no pensionado, se debe tener la calidad de cónyuge o compañero (a) permanente del finado (sin exigir un tiempo de convivencia mínimo³); **distinto si se trata de pensionado, caso en el cual -a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003- se requiere haber convivido con el causante por lo menos cinco (5) años continuos, con anterioridad a su muerte o haber procreado uno o más hijos con él;** exigencia que tiene como objeto evitar convivencias de última hora con quien ya ostenta el estatus de pensionado, para beneficiarse de una eventual pensión de sobrevivientes; **sin que la citada norma establezca ese mismo requisito, para cuando la prestación se causa por muerte de afiliado, como ocurre en el asunto analizado; lo cual está en concordancia con el criterio vigente del Máximo Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, esto es, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.**

Dada su pertinencia, se expone a continuación el tema referente a los principios que gobiernan la pensión de sobrevivientes:

La H. Corte Constitucional en la **Sentencia C-1035 de 2008**, de la cual fue M.P. el doctor Jaime Córdoba Triviño, establece como **principios que definen el contenido constitucional de la pensión de sobrevivientes como prestación asistencial los siguientes:** Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante; **Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados y el Principio material para la definición del beneficiario,** indicando respecto a éste último que la convivencia efectiva al

³ Debiéndose tener presente, las normas que regulan en el caso de los compañeros (as) permanentes, unos tiempos mínimos para entenderse que esas relaciones tienen vocación de permanencia y no son esporádicas o eventuales. Además, habrá que analizarse en cada caso, si cuando se trata de cónyuges, también el matrimonio tiene una finalidad distinta a la de conformar una familia, con vocación de permanencia, para evitar eventuales fraudes o aprovechamientos ilícitos del sistema pensional.

momento de la muerte, la acoge la legislación colombiana como un criterio material, para determinar quién es el beneficiario de la pensión⁴.

Sobre el principio de progresividad, la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-556 de 2009, en la cual se resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, con ponencia del doctor Nilson Pinilla Pinilla, se indicó:

“...El deber asumido por el Estado al respecto es de no regresividad, es decir, no es legítimo, en principio, adoptar medidas ni sancionar normas jurídicas que disminuyan los derechos económicos, sociales y culturales de los que disfruta la población.

Dado que, por regla general, el Estado se obliga a mejorar el cubrimiento y calidad de estos derechos, simultáneamente asume la proscripción de reducir los niveles vigentes o derogar los ya existentes. Es decir, no pueden existir reformas regresivas, salvo que exista una justificación de raigambre constitucional.

Por tanto, dentro de la normatividad constitucional se pregona la progresividad de los derechos, lo cual significa, en principio, que han de ser mejorados o dejados igual, pero no disminuidos. Por eso, los mínimos básicos que garantizan las políticas públicas de un Estado, deben ser progresivos y facilitar las estrategias de protección de los derechos económicos, sociales y culturales...”.

Por su parte **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, sobre el principio de progresividad, en**

⁴ En concreto en la providencia se indica:

“...Por su parte, esta Corte ha desarrollado una serie de principios que definen el contenido constitucional de la pensión de sobrevivientes como prestación asistencial:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante: *Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”⁴. Por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades⁴.*

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados: *En el mismo sentido, la Corte ha concluido que la sustitución pensional busca impedir que sobrevinida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes⁴”*

3. Principio material para la definición del beneficiario: *En la sentencia C-389 de 1996⁴ esta Corporación concluyó que:*

“(...) la legislación colombiana acoge un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como elemento central para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido”

9.5. Con base en todo lo anterior, y teniendo en cuenta que con la pensión de sobrevivientes se garantizan derechos constitucionales de carácter fundamental, para la Corte, las disposiciones destinadas a regular los aspectos relacionados con esta prestación asistencial, de ningún modo, podrán incluir expresa o implícitamente tratos discriminatorios que dificulten el acceso a ésta, dada su especial dimensión constitucional...”.

Sentencia con Radicado 35319 del 8 de mayo de 2012, M.P.
doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, indicó que:

“...la aplicación de principios responde a la naturaleza irrenunciable del derecho de la seguridad social, y a los valores de solidaridad, universalidad y progresividad de su cobertura, inspiradores del sistema integral adoptado en Colombia desde la Constitución de 1991.

(...)

De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen “plena validez y eficacia” en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del “derecho del trabajo”, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

(...)

Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma una visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no sólo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez.

En ese orden, no pudo haber equivocación en la determinación del Tribunal, que ante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, aplicó el 39 de Ley 100 de 1993 y el principio de progresividad...”.

A su vez, el artículo 53 de la Constitución Política, citado en la jurisprudencia referida, establece como principio la garantía a la seguridad social:

“...El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

*Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; **garantía a la seguridad social**, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad...”.* (Negrillas fuera de texto)

Y el artículo 3º de la Ley 100 de 1993 consagra:

“...Del derecho a la seguridad social. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.

Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley...” (Negrillas fuera de texto).

Sobre el requisito de la convivencia:

La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha indicado que la convivencia entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común, lo que excluye los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida; ver en Sentencias **SL803 de 2022, SL3570 de 2021, SL 2090 de 2020**, SL 2488 de 2020, SL 4263 de 2019, entre otras.

Así mismo, **en Sentencia SL100 de 2020** Radicado 67800, reiterando CSJ SL1015-2018 y CSJ SL4099-2017, indicó que **la pensión de sobrevivientes no emerge de la sola acreditación del vínculo matrimonial o de hecho** que los reclamantes aseguren haber tenido con el fallecido, pues jurisprudencialmente se ha sostenido que “...**tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material**, por el término establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario...”.

Y en Sentencia SL1730 del 3 de junio de 2020⁵, explicó que de lo dispuesto en el **literal a)** del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado **beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado** al sistema que fallece, **no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia**, toda vez que con la simple **acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo**

⁵ En la que trató el tema, a raíz de Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral de este Tribunal en el radicado 05001310500720090001801, donde la aquí Magistrada Ponente actuó en igual calidad y en aquella decisión se sostuvo que tratándose de afiliado fallecido, no pensionado, el tiempo de convivencia que debía demostrar quien reclamara en calidad de compañera permanente, era de dos años y no de

familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal citado, dando lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia que corresponda, esto es, la pensión de sobrevivientes, indemnización sustitutiva o devolución de saldos.

Recordó la H. Corte Suprema de Justicia, que no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, tratándose de afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social; concluyendo: “...**la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado...**” (Negritas fuera de texto). **Postura reiterada en Sentencias SL5626-2020, SL3843-2020, SL1905-2021, SL4283-2022**, entre otras, algunas de estas sin reconocer pensión, pero por no haberse demostrado la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia con el afiliado fallecido, en los términos exigidos en la Ley 797 de 2003 y desarrollados por el actual criterio de la Corte.

En SL4283-2022, entre otras, expuso los argumentos de índole jurídico por los cuales se aparta del precedente constitucional, indicando lo siguiente:

“... En síntesis, pueden extraerse dos reglas [...] que fijan el alcance y la correcta interpretación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003: i) **La pensión de sobrevivientes en materia de afiliados al sistema de seguridad social, no exige un tiempo mínimo de convivencia para acreditarse como beneficiarios la cónyuge o la compañera permanente** y, ii) No existe un trato diferenciado para la aplicación de la regla anterior, es decir, no importa la forma en la que se constituya el núcleo familiar, vínculos jurídicos o naturales,

cinco (5) como se había exigido en la primera instancia.

*la protección se dirige al concepto de familia (artículo 42 de la C.P.), luego **el análisis se circunscribe en estos casos a la simple acreditación de la calidad requerida y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte...*** (Negritas fuera de texto).

Por todo lo explicado, **esta Sala de Decisión Laboral comparte el criterio del precedente vertical vigente fijado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, teniendo en cuenta que el **artículo 234 de la Constitución Política** establece que **es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria** y tiene atribución de actuar como Tribunal de Casación (art. 235); dicha Corporación en decisión **AL8458 de 2017 Radicado 77136 M.P. doctor Gerardo Botero Zuluaga**, indicó que a partir de su conformación en el año 1886, **se le asignó como finalidad principal la unificación de la jurisprudencia**; además que, la **H. Corte Constitucional en Sentencia SU 113 de 2018** entre otras, señaló que el precedente vertical a seguir por los funcionarios judiciales es el determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre, encargados de unificar la jurisprudencia dentro de su respectiva jurisdicción.⁶

En el asunto debatido, no es motivo de discusión en esta Segunda Instancia, que la demandante Luz Helena Cardona Cano contrajo matrimonio con el señor Justo Gustavo Umaña Casas el 2 de enero del año 1993⁷; que éste último falleció el 7 de

⁶ Por su parte, la H. Corte Constitucional en Sentencia SU 149 del 21 de mayo de 2021, reafirmó que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la compañera permanente, es de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado; exponiendo que “...la lectura acogida por la Corte Suprema de Justicia partía de una hermenéutica plausible del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. No obstante, en concordancia con lo expuesto sobre la violación directa de la igualdad y la sostenibilidad financiera del sistema pensional, dicha interpretación contradecía principios constitucionales y conducía a resultados desproporcionados respecto de la desprotección del grupo familiar ante reclamaciones pensionales ilegítimas y en relación con la finalidad de la pensión de sobrevivientes, que es amparar a la familia del fallecido...”.

⁷ Registro Civil de Matrimonio -Folios 10 a 11 del archivo 01 del expediente digital-.

abril de 2019⁸ y que mediante Resoluciones SUB 158013, SUB 182533 y DPE 7905, todas del año 2019⁹, le fue negada la pensión de sobrevivientes a la demandante, argumentando ausencia del requisito de convivencia.

Encontrando esta Colegiatura que lo aducido por Colpensiones para negar la pensión de sobrevivientes, no es de recibo para esta Sala de Decisión, conforme lo precisado en la jurisprudencia antes referida, pues **el hecho de estar separada la pareja por razones laborales –como lo reconoció la entidad en la investigación administrativa- no implica que desaparece la convivencia**, puesto que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo, así como el acompañamiento espiritual.

En la presente Litis **los declarantes Eulises Antonio Zapata Yepes¹⁰ y la señora Nelly Esperanza Cardona Cano¹¹, fueron coincidentes en afirmar** que la señora Luz Helena Cardona Cano y Justo Gustavo Umaña Casas **estaban casados, que siempre llevaron una relación como pareja, nunca se separaron, era el causante quien veía por el sostenimiento de su cónyuge, la casa de residencia en Medellín estaba a nombre de los dos y ella era beneficiaria en salud de él y al momento**

⁸ Registro Civil de defunción -Folios 8 a 9 del archivo 01 del expediente digital-.

⁹ Folios 17 a 25 y 62 a 65 del archivo 01 del expediente digital.

¹⁰ Cuñado de la demandante, quien afirmó que conoció a la pareja desde que se hicieron novios, que luego se casaron y estuvo en el matrimonio; que inicialmente vivieron en Bogotá y luego como en el año 2015 ó 2016 se vinieron para Medellín; que nunca se separaron y vivieron hasta que el falleció; que la separación de ellos era porque el trabajo de él era en Popayán, que inicialmente en se quedaba en un hotel, pero luego compró una casa para cuando la demandante iba, que dotaron la casa y ella unas veces iba y otras él venía a Medellín cada 8 días, en las vacaciones y en Semana Santa; que por su trabajo estaba en Popayán, pero ellos siempre estuvieron juntos; que quien llevó la obligación del hogar fue el causante, pues la demandante siempre ha sido ama de casa; que para el momento del fallecimiento el señor Justo Gustavo estaba en Popayán y la demandante estuvo con él allá hasta que él se agravó y se murió, sin que pudieran trasladarlo a Medellín por razones de la enfermedad. Explicó que el causante empezó a laborar en la Cooperativa de Caficultores del Cauca desde el año 2005 cuando ellos vivían en Bogotá y él se traslada allá y luego lo hizo desde Medellín y que la casa donde vivían en estaba a nombre de la pareja. Aseguró que la vida marital del causante siempre fue con la demandante.

¹¹ Hermana de la demandante, quien contó que ellas se conocieron con el causante en un viaje a Cartagena y la demandante empezó a salir con él, se hicieron novio y en el año de 1993 se casaron, que inicialmente vivieron en Bogotá y luego desde el 2016 en Medellín; que el señor Justo Gustavo laboraba en Popayán en la Cooperativa de Caficultores y se trasladaba desde esas dos ciudades allá; aseguró que la pareja nunca se llegó a separar, que se llamaban constantemente y cuando él no podía venir ella iba a Popayán. Manifestó que su hermana nunca ha laborado y el causante fue quien vio siempre por el sostenimiento de ella. Indicó que cuando él se enfermó su hermana se fue donde él hasta que falleció; que se trató de traerlo a través de la EPS, pero no fue posible; se agravó y entró a cuidados intensivos y ya no dejaron trasladar. Indicó que la demandante era beneficiaria en salud del causante; que la casa donde vivían en Medellín estaba a nombre de la pareja.

de su enfermedad y hasta su muerte estuvo con él.

De acuerdo a lo expuesto, **se encuentra demostrado el requisito de convivencia para la demandante tener derecho a la pensión de sobrevivientes**, tal como acertadamente lo estableció el Juez de Primera Instancia.

Anotándose que **si en gracia de discusión se aceptara que “entre el año 2005 y el 07 de abril de 2019, la pareja estaba separada de cuerpos”, como se aduce fue establecido en la investigación administrativa realizada por Colpensiones, también habría lugar al reconocimiento de la prestación pensional**, toda vez que se acepta por la entidad en ese mismo documento que había existido una convivencia de la pareja *“bajo el mismo techo de manera permanente y sin separaciones desde el día 02 de enero de 1993 hasta finales del año 2004”*¹²; **estando vigente el vínculo matrimonial**, evento en el cual la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, tiene precisado de manera reiterativa y pacífica que *“en caso de separación de hecho, la cónyuge no pierde el derecho pensional respecto del fallecido, siempre que el vínculo matrimonial permanezca vigente y a su vez, se acredite la convivencia de los cinco años en cualquier tiempo”*¹³ (Negritas y subrayas fuera del texto), condición de temporalidad que se cumple en este caso y daría también lugar a la pensión pretendida.

Corolario de lo explicado, esta Sala de Decisión Laboral confirmará la decisión de Primera Instancia en cuanto condenó a Colpensiones al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante Luz Helena Cardona Cano.

¹² Resolución SUB 158013 de 2019 –Folios 62 a 65 del archivo 01 del expediente digital–.

2° Intereses moratorios:

Aduce la apoderada de Colpensiones que no hay lugar a condenar al reconocimiento de intereses moratorios por cuanto se negó la prestación al no acreditar la demandante los requisitos, sin existir por parte de la entidad capricho o arbitrariedad; encontrando esta Sala de Decisión que no le asiste razón, toda vez que:

Los intereses moratorios se encuentran consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, norma que preceptúa, se causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales. Y el art. 1° de la Ley 717 de 2001, establece: *“El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el petionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.”* Se concluye de lo expuesto, que para el caso de la pensión de sobrevivientes, el fondo administrador de pensiones, tiene un plazo de máximo para decidir si reconoce y paga la prestación solicitada y si en efecto, la entidad niega el derecho solicitado y luego se determina judicialmente que había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o supera el término antes indicado, se presenta entonces, un retraso injustificado, en el reconocimiento de la pensión, causándose intereses moratorios.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en lo que respecta al reconocimiento de intereses moratorios frente a la prestación pensional que se reclama ha señalado que se deben imponer al margen de la buena o mala fe en que haya incurrido la administradora, siempre que se demuestre el retardo injustificado por parte del obligado y que no hay lugar a su imposición en aquellos eventos en que las

¹³ Sentencia SL 1646 de 2019 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación; al respecto ver las Sentencias SL 5673 y SL 1388 del año de 2021; SL 5181 y SL 5172 del año 2020; entre muchas otras.

En el presente asunto, no se presenta una justificación de la entidad en su negativa de reconocer la pensión, pues como se explicó en precedencia se cumplieron todos los requisitos para tener derecho la demandante a la pensión de sobrevivientes; **configurándose por tanto un retardo injustificado de la entidad, que da lugar al reconocimiento de intereses moratorios, tal como lo estableció el Juzgado de Primera Instancia; procediendo por tanto confirmar la decisión, lo cual se hace extensivo a la fecha de reconocimiento de los mismos, esto es, pasados dos meses luego de presentada la solicitud.**

3° En Consulta:

Se confirmará la decisión en cuanto al valor de la mesada pensional obtenida, tal como se verifica en liquidación efectuada por el contador Liquidador asignado a este Tribunal – señor Carlos Mario Acevedo Laserna-, así como en el valor del retroactivo pensional reconocido, sin que en este caso se hubiere configurado el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que las acciones laborales prescriben en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y el simple reclamo escrito interrumpirá la prescripción, por un lapso igual. La demandante solicitó la pensión el 25 de abril de 2019, tal como se constata en la

Resolución SUB 158013 de 2019¹⁴ y por tanto al haberse presentado demanda el 20 de enero de 2020¹⁵, no transcurrió el período prescriptivo de tres (3) años.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral confirmará la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación y Consulta se revisa, incluida la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de Colpensiones, al no haber prosperado el recurso de Apelación, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000,00) en favor de la parte demandante;

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

¹⁴ Folios 62 a 65 del archivo 01 del expediente digital.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** y en el grado jurisdiccional de **Consulta** se revisa en favor de Colpensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en Costas en Segunda Instancia a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, fijándose las agencias en derecho la suma de **UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L (\$1.160.000,00)** en favor de la demandante **LUZ HELENA CARDONA CANO**; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por EDICTO, por el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Ponente



LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

¹⁵ Folio 7 del archivo 01 del expediente digital.



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: LUZ HELENA CARDONA CANO
Demandada	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-
Radicado	: 05001 31 05 004 2020 00030 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Pensión de sobrevivientes, afiliado-
Decisión	: Confirma decisión condenatoria
Sentencia N°	: 228

FECHA SENTENCIA: 8 de noviembre de 2023

Fijado viernes 10 de noviembre de 2023 a las 8:00 a.m.

Desfijado viernes 10 de noviembre de 2023 a las 5:00 p.m.
Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO